



República de Colombia



Sala Quinta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL – **SENTENCIA**
RADICACIÓN: 05 001 31 05 **003 2017 00773 01**
DEMANDANTE: EUGENIO ANTONIO LÓPEZ GIRALDO
DEMANDADO: MISIÓN EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES SA,
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES
URBANAS – ESU (antes METROSEGURIDAD),
EMPLEAMOS SA y MUNICIPIO DE MEDELLÍN
LLAMADA EN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA – SEGUROS
GARANTÍA: GENERALES SURA

Medellín, veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes y surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor del Municipio de Medellín, respecto de la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022, por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Pretende el demandante que se declare **i)** que se presentó una contratación fraudulenta e ilegal entre él, las empresas de servicios temporales codemandadas y la ESU, por tanto, las primeras tuvieron la calidad de simples intermediarios; **ii)** que existió una relación laboral con la ESU entre el 1° de noviembre de 2013 y el 28 de noviembre de 2015; en consecuencia, solicita que se condene de manera «conjunta, solidaria o separadamente» a las demandadas a pagar los salarios mínimos que devengan los trabajadores oficiales de la ESU

o los que se prueben y con ello, el reajuste de salarios, de las cesantías y de los intereses a las cesantías, más el excedente de las vacaciones, la indemnización por despido injusto, las primas de navidad y de vacaciones, las sanciones moratorias consagradas en los arts. 1º del Decreto 797 de 1949 y 99 de la Ley 50 de 1990, la primera desde la terminación de la relación laboral y la segunda desde el 15 de febrero de 2014, pero ambas hasta que se verifique su pago y la indexación de las condenas que sean compatibles con ello (págs. 12-14 arch. 2 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que inició una relación laboral con la ESU, la cual culminó el 28 de noviembre de 2015 sin justa causa por parte de dicha entidad; prestó sus servicios personales y subordinados por la ESU, recibiendo órdenes e instrucciones por parte de supervisores y personal dependiente de la misma entidad; por disposición de la ESU suscribió diversos contratos de trabajo con las empresas de servicios temporales Misión Empresarial SA y Empleamos SA, los cuales se denominaron de obra o labor determinada, con el fin de ejecutar funciones para la ESU, a cambio del pago de un salario básico mensual promedio de \$777.500, monto inferior al mínimo devengado por los obreros que prestan sus servicios regidos por un contrato de trabajo en la ESU como se detalla en el hecho n.º 7; y, ninguna de las demandadas le pagó las acreencias laborales con base en ese monto.

Informó que existieron varios contratos interadministrativos entre la ESU y el Municipio de Medellín en los que la primera se obligó a responder por las prestaciones laborales de los obreros que se necesitaran contratar para desarrollar el objeto de tales convenios; en tal virtud, por orden de la ESU y para dar cumplimiento a los convenios interadministrativos, se celebraron entre la ESU y las mencionadas empresas de servicios temporales varios contratos de suministro de personal, con el fin de que los trabajadores laboraran en la Subsecretaría de la Defensoría del Espacio Público que pertenece al municipio demandado (págs. 6-12 arch. 2 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue admitida mediante auto del 22 de enero de 2018 ordenándose la notificación y traslado a las demandadas (págs. 206 arch. 2 C01), quienes contestaron dentro del término respectivo.

La **ESU**, se opuso a las pretensiones pues alegó la existencia de contratos de trabajo entre el demandante con las EST codemandadas, por lo que acepta su calidad de simple intermediaria porque existió un contrato de administración delegada de recursos destinados por el Municipio de Medellín para la defensa y control del espacio público, por ende, el beneficiario real de la labor fue dicho ente territorial ya que tales actividades son de su competencia y están a cargo de la Subsecretaría Defensoría del Espacio Público de la Secretaría de Gobierno; admitió que el salario mínimo que se paga en la entidad era de \$1.244.590 para el 2013, \$1.296.739 para el año 2014 y de \$1.373.376 para el 2015, que es el pago que se hace a quien funge como Mensajero Conductor en la ESU, sin que el cargo de Defensor del Espacio Público exista en la empresa de seguridad urbana. Propuso como excepciones las de mala fe del demandante, buena fe de la demandada, falta de causa para pedir, falta de calidad de trabajador oficial, prescripción, pago y compensación (págs.. 231-241, 598 arch. 2 C01).

El **Municipio de Medellín**, se opuso a las pretensiones con el argumento de que no le consta ninguno de los hechos, excepto los relacionados con los contratos de prestación de servicios realizados entre varias EST con la ESU, entidad totalmente diferente, autónoma y ajena al ente territorial, sin que haya existido en forma directa con el demandante algún vínculo contractual; de conformidad con la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 785 de 2005 no existe el cargo de Defensor del Espacio Público, dado que este viene cumpliendo labores que en estricto sentido le corresponden a la Policía Nacional, por eso se buscaron tales alternativas de contratación, para lo cual se debe tener en cuenta lo indicado en la sentencia CC C-492-2002 acerca de la diferencia entre poder, función y actividad de la Policía. Propuso las excepciones de mérito denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, ausencia de nexo causal, buena fe, compensación, prescripción, pago de lo no debido y cláusulas de indemnidad y exclusión de responsabilidad (págs. 256-270, 433, 462-476, 598 arch. 2 C01).

Llamó en garantía a Seguros Generales Suramericana SA, en virtud de las pólizas n.º 0729030-1, 0836109-2, 0729030-1 [sic] y 1102408-3 con las que se garantiza el riesgo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales derivadas del cumplimiento del objeto de los contratos interadministrativos n.º 4600040900 de 2012, 4600045644 y

4600050309 de 2013 y 4600055366 de 2014, respectivamente; tales pólizas fueron tomadas por la ESU y se indicó que el asegurado y beneficiario es el Municipio de Medellín (págs. 281-285 arch. 2 C01); mediante auto del 24 de septiembre de 2018 se admitió el llamamiento en garantía (pág. 433 archs. 2, 3 C01).

Misión Empresarial SA se opuso con el argumento de que no le consta que entre el demandante y la ESU existió algún vínculo, contrató a aquel laboralmente en varios períodos de tiempo existiendo una interrupción de meses entre cada vínculo, tiempo en el cual, no prestaba servicios ni realizaba alguna actividad, en todo caso, cada contrato fue liquidado y pagado legalmente, siendo la ESU la usuaria durante el tiempo que duraron las licitaciones correspondientes para la ejecución de los convenios comerciales n.º 4600050309 de 2013 y 201400363 [sic], sin que se hubieran superado los límites temporales para el personal en misión. Propuso la excepción de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, pago y compensación (págs.. 453-461, 598 arch. 2 C01).

Empleamos SA se opuso a lo pretendido en la medida en que con el demandante firmó dos contratos sucesivos desde el 10 de marzo de 2015 hasta el 28 de noviembre de 2015, cuando se dio por terminada la obra o labor por orden de la usuaria ESU respetando los plazos legales establecidos para las EST y conforme los contratos n.º 201500141 y 2015410, ya que se necesitaba enviar en misión el personal que la entidad requería con destino a la Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial del Municipio de Medellín *«donde se impartían las órdenes y se establecían condiciones de tiempo, modo y lugar, sin que ello generara por sí solo, un vínculo directo»*. Excepcionó de inexistencia de las obligaciones, legalidad de la terminación del contrato de trabajo, pago, buena fe y prescripción (págs. 506-513, 598 arch. 2 C01).

Seguros Generales Sura, contestó con oposición tanto al llamamiento en garantía como a las pretensiones de la demanda, argumentando que pese a la existencia de los amparos referidos a las 4 pólizas, con los límites, coberturas y exclusiones contemplados en los correspondientes contratos de seguro, no le consta lo relacionado con el vínculo laboral deprecado por el demandante, de ahí que las pólizas tienen como cobertura los eventos en que trabajadores

directos de la ESU demanden solidariamente al Municipio de Medellín, por prestaciones a cargo de su empleador, pero no por contrato realidad sino con una relación calificada sin dubitación como laboral, así que el demandante no puede ser asumido como trabajador oficial por una supuesta intermediación laboral; y, si se establece que el asegurado no cumplió con las obligaciones, vulneró prohibiciones legales o contractuales o que el siniestro se debió a una conducta constitutiva o realizada con dolo o culpa grave, no puede concederse el reembolso ante una eventual condena. Propuso como excepciones las denominadas límite del valor asegurado, exclusiones del contrato de seguro, ausencia de cobertura, afectaciones de la póliza por otros siniestros, deducible pactado, prescripción, inexistencia de la obligación y de solidaridad laboral, enriquecimiento sin causa y cobro de lo no debido (archs. 39, 40 C01).

La **Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado** guardó silencio pese a haber sido comunicada de la existencia del proceso (arch. 50 C01).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 3º Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 26 de mayo de 2022, declaró la existencia de un contrato de trabajo realidad entre el demandante y la Empresa para la Seguridad Urbana EICE del nivel municipal, vigente del 1º de noviembre de 2013 al 28 de noviembre de 2015 cuyo beneficiario de la labor fue el Municipio de Medellín; en consecuencia, condenó a estas 2 entidades de manera solidaria al pago de las siguientes acreencias y montos:

- a) Reajuste salarial para los años 2014 (\$3.125.540) y 2015 (\$4.309.362).
- b) Reajuste de las cesantías año 2013 (\$77.848), 2014 (\$355.175) y 2015 (\$359.114).
- c) Reajuste de las primas de servicios de los años 2014 (\$262.435) y 2015 (\$359.114).
- d) Reajuste de los intereses a las cesantías años 2014 (\$31.492) y 2015 (\$39.263).
- e) Reajuste de las vacaciones de los años 2014 (\$262.435) y 2015 (\$359.114).
- f) Primas de vacaciones años 2014 (\$262.435) y 2015 (\$359.114).
- g) Primas de navidad de los años 2014 (\$957.426) y 2015 (\$1.250.916).

- h) Indemnización por despido sin justa causa: \$7.004.218.
- i) Sumas todas estas que deberán ser pagadas en forma indexada al momento de su pago.
- j) La sanción del art. 99 de la Ley 50 de 1990 liquidada desde el 6 de abril de 2014 hasta el 26 de mayo de 2022 en \$134.178.249, y a partir de allí, \$45.779 diarios por cada día de retraso en el pago de dicha suma de dinero.

Por otra parte, declaró que Seguros Generales Suramericana SA no está obligada a responder solidariamente con el Municipio de Medellín, pues este ente territorial actuó con culpa grave en los contratos sucesivos realizados por las empresas de servicios temporales Misión Empresarial Servicios Temporales SA y Empleamos SA a través de la ESU, quien además, fungió como simple intermediario [sic]; absolvió a Misión Empresarial Servicios Temporales SA y a Empleamos SA de todas las pretensiones incoadas en su contra, atendiendo a que no son las verdaderas contratantes del demandante, simplemente se prestaron para realizar un contrato que no era real; ordenó compulsar copias al Ministerio de Trabajo para que se estudie respecto de estas dos EST, si ante una eventual irregularidad en los contratos de trabajo realizados por fuera de la competencia establecida en los arts. 77 y ss de la Ley 50 de 1990, es viable imponerles sanciones administrativas correspondientes; declaró no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas, pero parcialmente próspera la de prescripción e impuso costas a cargo de la ESU, siendo el Municipio de Medellín responsable solidariamente en su pago para lo cual fijó las agencias en derecho en \$4.000.000.

Para lo que interesa a la alzada, señaló que la organización y control del espacio público no se puede delegar en manos de particulares, porque en esencia esa función es del estado; que aun cuando no se allegaron pruebas testimoniales, la ESU resulta ser la verdadera empleadora del demandante, quien demostró conforme a las pruebas documentales y las aceptaciones realizadas por las demandadas en las contestaciones, que desarrolló actividades de control del espacio público, de ahí que la mencionada entidad actuó de forma tal que siempre pretendió ocultar un vínculo con su trabajador, pues de forma discriminativa y de mala fe, lo hizo a través de empresas de servicios temporales a quienes contrató en forma simulada y sin cumplir con lo establecido en el art. 77 de la Ley 50 de 1990, para suministrar personal con destino a la Subsecretaría del Espacio Público para el control, monitoreo y

vigilancia del espacio público, resultando el demandante ser un verdadero trabajador oficial de la ESU, con la advertencia de que con la labor ejecutada como Gestor Operativo, con la que incluso efectuó control de habitantes de calle y de vendedores informales, se benefició el Municipio de Medellín, teniendo en cuenta el objeto y alcance de los contratos administrativos celebrados entre esas codemandadas desde el 2004 al 2015.

Agregó que la discriminación se vio, dado que un trabajador directo de la ESU devengaba como asignación mínima para el año 2013 la suma de \$1.244.590, para el 2014 \$1.296.739 y para el 2015 \$1.373.376, mientras que al demandante se le pagaban sumas inferiores, por lo que ordenó el reajuste salarial y prestacional con base en dichas sumas que debió haber recibido; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción al tenor de lo dispuesto en la Ley 6ª de 1945 dado que se presentó reclamación administrativa el 6 de abril de 2017, por lo que las acreencias afectadas con dicho fenómeno son las exigibles con anterioridad al 6 de abril de 2014, excepto las cesantías que es exigibles en su totalidad a la terminación del vínculo laboral.

Concedió la sanción del art. 99 de la Ley 50 de 1990 por el no pago completo de las cesantías al finalizar la relación laboral ni consignarlas al fondo respectivo, la cual debería liquidarse desde el 15 de febrero de 2014, de no ser por la prescripción, pues consideró que la ESU actuó de mala fe por efectuar contratos en forma simulada con personas naturales, con la excusa de dar cumplimiento a convenios interadministrativos, yendo en contra de la jurisprudencia de las altas cortes, aunado a que dentro de los contratos suscritos entre el demandante y las EST se anotó que la ESU actuaría como “*empleador usuario*”, con lo cual también encontró que el municipio demandado tuvo culpa grave en ello, porque tenía pleno conocimiento de que no podía delegar en particulares el control territorial del conflicto propio del espacio público, pues debió ejercerlo incluso temporalmente con sus propios empleados; de ahí que no pueda ser condenada la llamada en garantía, dado que la mala fe y la culpa grave no pueden ser objeto de aseguramiento.

Ordenó la indemnización por despido sin justa causa conforme el Decreto 2127 de 1945, pues los contratos con trabajadores oficiales tienen una vigencia prorrogable de 6 meses en 6 meses, así que estaba vigente la cuarta prórroga al momento de ser despedido, por lo que le quedaron adeudando 158 días de

salario que liquidó con el reajustado para el año 2015. Finalmente compulsó copias en virtud del principio de colaboración armónica establecido en el art. 113 de la CP (arch. 59, 60 C01).

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

La **ESU** señaló que no ostenta la calidad de empleadora, porque no se tuvo en cuenta que las funciones reales que desempeñó el demandante diariamente fueron en beneficio de la Subsecretaría del Espacio Público, de ahí que no se haya acreditado una intervención directa por parte de la ESU frente a las órdenes dadas, el direccionamiento, pagos de salarios y demás situaciones relacionadas con la actividad laboral desarrollada por el demandante. Agregó que los contratos interadministrativos suscritos con el Municipio de Medellín, no nacen por una voluntad propia de la institución, sino por una obligación naciente de un superior jerárquico como lo es el mencionado municipio, así que pese a que la ESU tiene autonomía, está subordinada de alguna manera conforme lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 y los Decretos Municipales 178 de 2002 y 495 de 2012, por lo que no podía negarse a los requerimientos realizados por el municipio, so pena de hacerse acreedora de sanciones por parte de dicho ente; con ello, consideró que en este caso, la ESU habría ostentado su calidad de intermediaria mientras que la verdadera empleadora sería el municipio demandado, por haber establecido la contratación, los alcances y necesidades de las mismas.

Dijo que no se demostró la mala fe de la ESU porque los contratos interadministrativos y los realizados con las empresas temporales son actos de administración de recursos y no de regulación de control de personal, por eso cada empresa contratante era autónoma e independiente; en consecuencia, debería ser exonerada del pago de las indemnizaciones por despido injusto y moratorias.

El **Municipio de Medellín** manifestó que no se puede exonerar a la aseguradora de soportar las consecuencias económicas adversas a dicho ente territorial porque no ha actuado con culpa grave, lo cual ocurre cuando se da un comportamiento irresponsable o una ignorancia supina, y en este caso, por el contrario, el municipio ha sido responsable pues el cuidado del espacio público corresponde al estado y el ente territorial solo puede hacer lo

expresamente autorizado por la ley de conformidad con el art. 122 de la CP; además, de conformidad con la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 785 de 2005 que regula la nomenclatura y los diferentes niveles de la administración pública territorial, no se le permite al municipio crear cargos de defensores del espacio público.

Agregó que la función que ejerce el municipio de Medellín en materia de control del espacio público, ya está asignada a los inspectores de policía y a través de ellos se cumplen las funciones propiamente públicas administrativas distintas a las que ejerce la Policía Nacional, lo que se desarrolla de conformidad con el art. 5º de la Ley 489 de 1998 que establece que entre las diferentes instituciones y de acuerdo a sus competencias administrativas, pueda haber un sistema de colaboración armónica, de lo contrario las malas prácticas de los ciudadanos harían invivable esta ciudad, por ello es que la actividad que se ejecuta se hace a través de los contratos de prestación de servicios de conformidad con el art. 32 de la Ley 80 de 1993 o a través del mecanismo que utilizó la ESU con las empresas temporales, porque no es una función propia de la entidad, sin que con ello se haya dado una trasgresión de mala fe, frente a los derechos de los trabajadores, pues lo que siempre se ha expresado es la voluntad orientada a mejorar las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y de vida de la comunidad en la ciudad de Medellín y además, no se trata de personal armado ni uniformado como la Policía Nacional.

Manifestó que aquellos que cumplen actividades de policía, como los defensores del espacio público, no ejecutan actividades propias de la municipalidad, porque el control que ejercen tiene esa naturaleza, dado que retiran personas que invaden el espacio público con actividades diversas y diferentes al acceso y disfrute que debe tener cualquier ciudadano, por lo que no existe la solidaridad que se desprende del art. 6º del Decreto 2127 de 1945, porque a pesar de que el municipio es beneficiario, la actividad no es del giro ordinario del ente territorial. Adujo que no está de acuerdo con los montos establecidos en las condenas porque el demandante no cumplió con la carga probatoria necesaria para ello; no se deduce la mala fe de la ESU, quien participa con un contrato interadministrativo por cuenta y riesgo del mandante que es el municipio, por ende, la ESU no es propiamente el empleador porque está cumpliendo un mandato contenido en tales convenios, que no fueron objeto de reparo de la parte actora. Finalmente sostuvo que no se analizó el

factor de competencia, porque debido a esos convenios interadministrativos, es que ha debido conocer de este proceso la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cual fue obviado por el *a quo*.

El **demandante** argumentó que de conformidad con la sentencia CSJ SL 9641-2014 con radicado 43457, este tipo de prestaciones no prescriben, porque el término trienal se debe contar a partir de cuando tales derechos son exigibles y ello ocurre a los 90 días posteriores al finiquito de la relación laboral con la ESU, que es el plazo gracia que la ley le da a las entidades para que pongan a disposición del trabajador los emolumentos adeudados, entonces estos son exigibles a partir del día 91 que es cuando el empleador queda constituido en mora. Adicionó que la sanción moratoria del art. 1º del Decreto 797 de 1949 no es excluyente con la otra indemnización que fue otorgada, máxime cuando se determinó que hubo mala fe de la ESU, en consecuencia, se debe otorgar la sanción mencionada.

Misión Empresarial SA, no se encuentra de acuerdo con la orden relacionada con compulsar copias, porque el operador judicial no tiene facultades para ello al no hacer parte de las pretensiones, ni estaría dentro de las facultades *ultra y extra petita*, aunado a que la empresa participó de una licitación que era legalmente conducida por la misma entidad que se encargaba de hacer las veedurías pertinentes desconociendo las eventuales irregularidades de los contratos interadministrativos y, de conformidad con la Ley 50 de 1990 no es una obligación para las EST verificar si las empresas usuarias se encuentran o no dentro de las posibilidades legales para contratar personal en misión; en el presente caso, en las licitaciones se adujo que el motivo de la contratación era por un incremento en la prestación de servicios en virtud de los contratos administrativos, así que no hubo ilegalidad alguna en la contratación.

Empleamos SA manifestó que se adhiere a la apelación presentada por Misión Empresarial EST, a lo que agregó que actuó de buena fe, de manera legal y válida en los contratos celebrados con la ESU en el año 2015, pues fue invitada a través de una solicitud privada de oferta que le realizó la ESU, frente a la que presentó su propuesta de servicios, junto con otros proveedores, siéndole adjudicado el contrato de manera válida y no fraudulenta, y cumplió a cabalidad con los cánones legales que regulan su actividad como empresa de servicios temporales

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante providencia del 7 de septiembre de 2022 se admitieron los recursos de apelación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, en auto del 28 de octubre siguiente, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar, quienes a excepción de la ESU, allegaron escritos en los que insisten en los argumentos expuestos en la demanda, las contestaciones y las apelaciones (archs. 2-9 C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver los recursos de apelación de las partes y a surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor del Municipio de Medellín, y de conformidad con lo previsto en los arts. 66A y 69 del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar **i)** si esta jurisdicción es la competente para conocer del presente asunto, en tal caso, **ii)** si la ESU puede ser considerada como verdadera empleadora del demandante; **iii)** si como consecuencia de ello, resulta viable condenar de manera solidaria al Municipio de Medellín; **iv)** si los conceptos y valores respecto de los que se emitió condena por acreencias laborales, proceden, se encuentran bien liquidados y si es viable declarar su prescripción parcial; **v)** si son procedentes las sanciones moratorias reclamadas; **vi)** si hay lugar a condenar a la llamada en garantía; **vii)** si hay lugar a revocar la orden del *a quo* de compulsar copias al Ministerio de Trabajo para investigar las conductas en que incurrieron las empresas de servicios temporales.

Competencia de la jurisdicción ordinaria laboral.- Si bien se ha estimado por parte de la Corte Constitucional que la competencia para conocer de procesos a través de los cuales se pretenda verificar relaciones laborales presuntamente encubiertas en repetidos contratos estatales de prestación de servicios, es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de acuerdo con lo establecido en el art. 104 de la Ley 1437 de 2011, pues resulta ser un asunto de naturaleza no laboral celebrado entre los particulares y entidades estatales (CC A-492-2021, CC A-1652-2023); lo cierto es, que aun cuando se haya pretendido la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo realidad con la ESU, esa regla no es aplicable al presente caso, como quiera que aquí no

mediaron contratos de prestación de servicios suscritos entre el demandante y la ESU al tenor de lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 80 de 1993, porque justamente lo solicitado tiene sustento en los ininterrumpidos contratos de obra o labor celebrados directamente por el demandante como trabajador en misión, con empresas de servicios temporales (que no hace parte de la contratación estatal), sin que la sola vinculación de una entidad pública o varias, en el extremo pasivo del proceso implique que esta jurisdicción pierda competencia para asumir el conocimiento del asunto.

Es decir, cuando una entidad pública es la usuaria del servicio contratado a través de una empresa de servicios temporales y, a partir de las pretensiones de la demanda, se puede considerar que el vínculo con la empresa privada se ha desnaturalizado, dicha Corporación ha determinado que la jurisdicción a la que corresponde el conocimiento del asunto, se basa en las reglas generales de vinculación de la entidad pública, así: **i)** cuando se encubre una relación laboral con el Estado que pone en riesgo la protección de los derechos laborales de los trabajadores, si lo que puede estar detrás es la evasión de un **vínculo contractual**, la competencia será de la jurisdicción **ordinaria** al enmarcarse la situación en lo establecido en el num. 1º del art. 2 del CPTSS y en la excepción del num. 4º del art. 105 del CPACA (CC A-1728-2013, CC A-3135-2023); pero **ii)** si el ocultamiento involucra haber omitido la formalización de una **relación legal y reglamentaria**, el conocimiento del asunto será de la jurisdicción de lo **contencioso administrativo**, pues al cuestionarse la legalidad de un contrato estatal se debe examinar la irregularidad en la actuación de la administración para determinar si se celebró un contrato de prestación de servicios o si, por el contrario se configuró realmente una vinculación laboral (CC A-252-2022), como cuando en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales a cargo directo de la entidad pública usuaria, cuya regla general de vinculación sea la de los empleados públicos, sin que pueda desvirtuarse a primera vista tal parámetro de vinculación (CC A-1159-2021), que no es lo que aquí acontece.

Adicionalmente a lo anterior, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU adscrita al municipio de Medellín (antes Fondo Metropolitano de Seguridad – Metroseguridad), de acuerdo con el Decreto Municipal n° 178 de 2002 expedido por la Alcaldía de Medellín (págs. 33-45 arch. 2 C01), es una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, con personería

jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, cuyo personal, por regla general, se vincula bajo las formalidades de los trabajadores oficiales, de conformidad con el art. 5º del Decreto 3135 de 1968, salvo que en los respectivos estatutos se disponga que las labores de dirección o confianza deban desempeñarse por empleados públicos de libre nombramiento y remoción¹; empero, ello no sucede en este caso porque según el art. 16 de los estatutos adoptados, modificados y compilados en la actualidad por la junta directiva mediante el Acuerdo n° 102 del 8 de marzo de 2021, se acogió esa regla general y se estableció que los únicos que ostentarían la calidad de empleados públicos son el Gerente General, los Gerentes Auxiliares, el Secretario General, el Tesorero y el Jefe de Control Interno². En el *sub lite* la labor que desempeñó el demandante, correspondió a la de Gestor Operativo (para la defensa del espacio público) que, indudablemente no encaja en la denominación antes referida, sin que se hubiere demostrado que tal designación estuviera relacionada con funciones de dirección, confianza y manejo.

De esta manera, resulta competente esta jurisdicción para conocer del presente asunto, con lo que se despacha desfavorablemente uno de los puntos apelados por el municipio encartado, pues se itera, en este asunto no se revisará ningún contrato de prestación de servicios de naturaleza estatal que haya vulnerado la autorización dispuesta en el art. 32 de la Ley 80 de 1993, como parece equivocadamente entenderlo el municipio, en el que la *«única autoridad judicial competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que “no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados” es el juez de lo contencioso administrativo»* (CC AL1652-2023, CC A-1377-2023).

Calidad de empleadora de la ESU.- En torno a la existencia del contrato de trabajo, debe advertirse que en ningún error incurrió el *a quo* cuando declaró tal aspecto entre el demandante y la ESU, en aplicación de los arts. 1º de la Ley 6ª de 1945, 5º del Decreto 3135 de 1968 y 12 de la Ley 314 de 1996, que disponen que las personas que prestan sus servicios a las empresas industriales y comerciales del Estado, por regla general, ostentan la calidad de trabajadores oficiales, así como de la presunción del mismo, contenida en el

¹ CC C-691-2017.

²<https://www.esu.com.co/wp-content/uploads/2022/06/Estatutos-compilados-Acuerdo-102.pdf> y <https://www.esu.com.co/normatividad/> - Cfr. Acuerdo n.º 106 del 31 de agosto de 2021 que adopta la planta de personal de la ESU: <https://www.esu.com.co/wp-content/uploads/2021/12/Acuerdo-106.pdf>

art. 20 del Decreto 2127 de 1945, al haber encontrado demostrado que el demandante prestó sus servicios a la ESU, sin que para ello sea necesario exigirle al trabajador la prueba de la subordinación o dependencia, como parece entenderlo en forma equivocada la ESU en su apelación, toda vez que este punto debe ser desvirtuado por el presunto empleador con la demostración de que el servicio prestado a su favor se desarrolló con autonomía e independencia. A lo que se agrega que, la figura de contratista independiente en el sector público está regulada en el art. 6º del citado Decreto 2127 de 1945, compilado en el Decreto 1083 de 2015.

Justamente, el elemento de la prestación personal y continua del servicio del demandante, se logró demostrar con los siguientes medios probatorios:

Se aportaron contratos de suministro de personal n.º 201500141 y 201500410 suscritos por la ESU con Empleamos SA, vigentes para el año 2015 entre el 9 de marzo y el 23 de junio y desde el 22 de julio hasta el 12 de noviembre, previas solicitudes privadas de ofertas, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, relacionado con la contratación de personal temporal que necesite la Subsecretaría de Espacio público y Control Territorial del Municipio de Medellín para adelantar los procesos correspondientes en virtud de los contratos n.º 4600058996 y 4600060774 de 2015.

Allí se indicó que la ESU requería inicialmente el suministro entre otros trabajadores con cargos distintos, de 330 Gestores Operativos, luego 278 y posteriormente 225, a los cuales dentro del mismo contrato de prestación de servicios se les asignó un salario de \$979.227, con cargo a los recursos de los mencionados convenios suscritos con el ente territorial; según lo allí descrito, las cantidades y cargos del personal en misión, podían variar de acuerdo con las necesidades del cliente final (págs. 514-541, 557-561 arch. 2 C01). Aunado a ello, aun cuando Misión Empresarial SA no aportó documentación al respecto, no se puede pasar por alto que en la contestación a la demanda confesó haber llevado a cabo contratos de la misma estirpe con la ESU como usuaria, con ocasión de las licitaciones correspondientes para la ejecución de los convenios comerciales n.º 4600050309 de 2013 y 201400363 [sic], así como también lo admitió la ESU en su contestación.

En torno a estos contratos de prestación de servicios, a simple vista no se genera ninguna ilicitud formal, no obstante, es preciso señalar que, en la elaboración se hizo referencia a la calidad en que obraba la ESU, en donde se dijo que la supervisión del cumplimiento se realizaría por la Secretaría General y Directora Administrativa y Financiera de la ESU, y la interventoría del contrato sería realizada por el Municipio de Medellín.

De otra parte, se aportaron contratos de trabajo por el término que dure la realización de obra o labor determinada, que el demandante suscribió con las empresas de servicios temporales codemandadas así: **i)** con Misión Empresarial SA del 19 de noviembre de 2013 al 30 de junio de 2014 y del 4 de agosto de 2014 al 8 de marzo de 2015, con el fin de desempeñarse como Gestor Operativo «según contrato 201400363» para la empresa usuaria ESU «con el fin de cumplir en las instalaciones de la empresa usuaria las funciones necesarias, de conformidad al art. 77 de la Ley 50 de 1990» y a cambio de un salario mensual de \$896.728 pagadero cada 15 días; y **ii)** con Empleamos SA en el año 2015 del 10 de marzo al 21 de julio y del 22 de julio al 28 de noviembre como Gestor Operativo para «cumplir en las instalaciones de la empresa usuaria ESU Espacio Público las funciones necesarias para dar» cumplimiento a los contratos SPVA 2015-022 y 201500410 «de conformidad al art. 77 de la Ley 50 de 1990» y con un salario mensual de \$979.227 cuyo periodo de pago era quincenal (págs. 92-95, 121-128, 147-151, 477-486, 562-565, 571, 574, 577, 579 arch. 2 C01).

Con los comprobantes de pago de nómina quincenales, se constatan los montos cancelados por las empresas de servicios temporales al demandante para el Oficio de Gestor Operativo del Centro de Costos ESU Espacio Público, a título de sueldo básico, auxilio de transporte, horas extras y compensatorios, así como en algunas ocasiones la prima de servicios; también se aportaron las liquidaciones realizadas por las EST de las que se coligen que le pagaron vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios. De igual manera, se allegó el reporte de semanas de cotización en el que aparecen las 2 EST encargadas cotizando a nombre del demandante ininterrumpidamente entre el 19 de noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2014 y del 3 de agosto de 2014 al 28 de diciembre de 2015 (págs. 96-103, 129, 130, 133-136, 166-173, 577, 579 arch. 2 C01).

Adicional a lo anterior y a pesar de las intermitencias en las conexiones de red, en la audiencia del 26 de mayo de 2022 se logró recepcionar por unos

pocos minutos la declaración de Richard Ferney Beltrán García, testigo solicitado por la parte actora, quien adujo haber laborado junto con el demandante en el espacio público del centro de Medellín, lo que recuerda dado que aquél inició actividades el 15 de noviembre de 2013, además informó que ambos estaban encargados de controlar los habitantes de calle y de limpiar las quebradas con el fin de ayudar al medio ambiente; declarante a quien se le otorga todo el mérito probatorio, por ser compañero de trabajo y exponer las razones de la ciencia de sus dichos pues le consta de manera directa la prestación personal del servicio del demandante para apoyar la gestión del espacio público, por haber pertenecido todos a la misma esfera laboral.

De manera que, con base en estas pruebas se presume la subordinación, en la medida en que la ESU demandada no desplegó actividad probatoria alguna tendiente a desvirtuar tal presunción y demostrar que la labor del demandante fue desempeñada con autonomía o con exclusiva dependencia de las empresas de servicios temporales demandadas, como para darle tintes de legalidad a su vinculación, pues el contrato de trabajo no deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, ni por las condiciones peculiares del empleador, persona jurídica o natural, ni por las modalidades de la labor, ni del tiempo que en su ejecución se invierta, ni del sitio en donde se realice, así sea el domicilio del trabajador, ni de la naturaleza de la remuneración, ya en dinero, ya en especie o ya en simple enseñanza, ni del sistema de pago, ni de otras circunstancias cualesquiera; encontrándose acertada la conclusión del *a quo* relativa a la existencia de un contrato de trabajo en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

A lo anterior se agrega que, conforme con los documentos aportados al plenario está acreditado que la prestación del servicio se dio en favor de la Subsecretaría del Espacio Público que es una dependencia de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Medellín, quien además a través de la mencionada Subsecretaría fungió como coordinador en la prestación del servicio, por lo que la ESU no era una contratista independiente, ni una simple intermediaria, dado que también tenía potestad subordinante y desde el punto de vista administrativo, cumplió las actividades propias de un empleador a través de sus contratistas, sin que el hecho de que esa contratación haya sido en beneficio de un tercero que además intervino en forma directa (Municipio de Medellín), le reste el carácter de empleador a la ESU.

Como si ello fuera poco, al analizar los convenios interadministrativos a los que se hizo referencia junto con el art. 2º del Acuerdo nº 033 de 2010 a través del cual se introdujeron inicialmente unos cambios a los estatutos de la primigenia Metroseguridad (hoy Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU) y en concordancia con los arts. 2º, 4º y 5º del ya citado Acuerdo nº 102 del 8 de marzo de 2021, se puede concluir que lo que hizo el Municipio de Medellín, fue delegar en la ESU la función de *“desarrollar estrategias de vigilancia y control sobre el uso adecuado del espacio público...”*, quedando la ESU con toda la facultad de contratar autónomamente, para lograr la ejecución de la labor encomendada, pagando a su vez, salarios y prestaciones sociales (págs.. 46- 50 arch. 2 C01), como en efecto lo hizo.

Si bien el demandante fue contratado al tenor de lo dispuesto en la Ley 50 de 1990 para llevar a cabo una labor u obra determinada, la misma no se establece con exactitud en ninguno de los contratos, siendo necesario en esta clase de convenios determinar en forma clara la obra a contratar, con la finalidad de que no existan dudas, que lleven a concluir que la vinculación se generó por un término indefinido o que no se cumplan los presupuestos del art. 77 de la citada Ley 50 de 1990. Aquí aun cuando se estableció que el demandante actuó como trabajador en misión, no se acreditó por parte de las encartadas en cuál de las modalidades establecidas en la mencionada normativa, se encontraba desarrollando las labores Eugenio López Giraldo.

Adicionalmente a pesar de que hubo un cambio de empresa de servicios temporales, con claridad se observa que el demandante continuó ejerciendo el cargo para la misma entidad usuaria por un tiempo superior al año permitido por el art. 77 de la Ley 50 de 1990, sin que la empresa beneficiaria pueda sobrepasar el término de ley, así fuera con una nueva EST, toda vez que, de esa manera, se desvirtúa completamente la temporalidad del servicio, advirtiéndose, por el contrario, su vocación de permanencia, donde el usuario se convierte en un verdadero empleador y, en tales condiciones, se desdibuja la legalidad y legitimidad de esta forma de vinculación laboral (CSJ SL17025-2016, CSJ SL1170-2017).

Con base en ello, no es posible considerar a la ESU como simple intermediaria que administra los recursos del municipio, porque se itera, el demandante fue vinculado para ejecutar la misma labor, a través de terceros, como trabajador en misión, lo que dadas las realidades del caso se efectuó en

desmedro de sus derechos, sin que sea justificante el argumento que expone la ESU tendiente a que simplemente cumplía las órdenes del Municipio, pues si bien sabía que lo que estaba realizando no se ajustaba a la regulación existente, bien pudo haberse negado a suscribir los convenios o simplemente efectuar la contratación de manera que no se menoscabaran los derechos del trabajador y no lo hizo. Así que la ESU resultó ser una verdadera empleadora.

En este punto, es necesario precisar que, cuando las pretensiones están cimentadas en una única relación laboral, como aquí acaece, se debe tomar para examinar las condenas, el último vínculo de carácter laboral continuo que ató a las partes (CSJ SL, 2 marz. y 19 oct. de 2006 rads. 26707 y 27371, CSJ SL691-2013 y CSJ SL5165-2017), de manera que, no es posible sostener que el contrato de trabajo surgió entre el 1º de noviembre de 2013 y el 28 de noviembre de 2015 sin solución de continuidad, dada la importante interrupción que ocurrió (del 1º de julio y el 3 de agosto de 2014), de donde, por lo prolongado de la interrupción del servicio, no se puede inferir que la intención de las partes era continuar con una misma relación de trabajo y que apenas se trataba de una mera formalidad.

Son las interrupciones mínimas, de días no meses, las que no causan solución de continuidad en estos eventos, porque son cortes efímeros e intrascendentales (CSJ SL 7 jul. 2010, rad. 36897, CSJ SL8936-2015, CSJ SL4816-2015), y aquí no se acreditó que el demandante prestó servicios en ese interregno, pues no se aportaron comprobantes de pago con los que se pudiera tener un indicio de ello y en las liquidaciones de los contratos de trabajo no se incluyó tal lapso para ser tenido en cuenta en el pago de acreencias laborales; mientras que sí podrá entenderse que no hubo una paralización relevante en tanto culminó el último contrato suscrito con Misión Empresarial SA y celebró el primer contrato con Empleados SA, para ejecutar bajo el mismo cargo, similares funciones en la ESU como entidad usuaria, la única diferencia fue el pequeño aumento de salario entre una EST y otra.

Por otra parte, contrario a lo señalado por el *a quo*, se advierte que no se acreditó una prestación de servicios con anterioridad al 19 de noviembre de 2013, como tampoco después del 28 de noviembre de 2015, sin que se pueda tener como prueba de esto último la novedad de retiro que efectuó Empleados SA ante Colpensiones, pues la jurisprudencia ordinaria laboral, ha sido clara en establecer que la afiliación a la seguridad social o el pago de los aportes al

sistema, no conlleva necesariamente la existencia de una relación laboral, a menos que existan pruebas contundentes que así lo acrediten (CSJ SL16528-2016), y que la misma es un elemento indiciario para acreditar tiempo y extremos temporales de una relación laboral, pero no es plena prueba de la misma (CSJ SL del 15 mar. 2011 rad. 37067); aquí no se encuentra otro medio probatorio del cual se pueda colegir que la prestación de los servicios se extendió más allá de la data mencionada.

Como consecuencia de lo anterior, a juicio de esta Corporación, esta interrupción resulta lo suficientemente real y prolongada, como para concluir que existió una ruptura en el nexo contractual, que imposibilita declarar la unicidad contractual. Así las cosas, se **modificará** la sentencia de primer grado, por cuanto probatoriamente se evidencia la existencia de 2 verdaderos contratos de trabajo entre el demandante y la ESU, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formas, así:

1. Del 19 de noviembre de 2013 al 30 de junio de 2014
2. Del 4 de agosto de 2014 al 28 de noviembre de 2015

En tal sentido, como el demandante fundamentó todos sus pedimentos en la existencia de un solo contrato de trabajo, se tendrá en cuenta y **declarará** únicamente la última relación que unió a las partes, para efectos de analizar las condenas que pretende, a cargo de su verdadera empleadora (CSJ SL 19 oct. 2006 rad. 27371, CSJ SL5165-2017, CSJ SL1045-2022); es decir, respecto del contrato de trabajo que se extendió entre el 4 de agosto de 2014 y el 28 de noviembre de 2015, extremos que corresponden a la última relación laboral **continua** sostenida por las partes.

Prescripción.- Por cuestiones prácticas, antes de estudiar el monto de las acreencias a las que tiene derecho el demandante, es necesario estudiar lo atinente a este medio exceptivo, como quiera que el actor en su apelación manifestó inconformidad con la forma en la que el juzgado cognoscente declaró parcialmente probada la prescripción, al aducir una incorrecta interpretación del art. 1º del Decreto 797 de 1949.

Al respecto se tiene por una parte que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en tratándose de reclamaciones de derechos laborales en virtud del principio de

la primacía de la realidad sobre las formalidades, el término prescriptivo previsto en los arts. 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 151 del CPTSS, 17, 23 y 31 del Decreto 1045 de 1978, Ley 995 de 2005³, y su Decreto Reglamentario 404 de 2006, se debe contar a partir del momento en que las obligaciones se hicieron exigibles, puesto que la declaración de existencia de un contrato de trabajo, en casos como el presente, no puede tener efectos constitutivos sino declarativos, en la medida en que reconoce la existencia de una realidad anterior a la fecha de la providencia (CSJ SL6380-2015, CSJ SL3161-2018, CSJ SL1785-2018).

A lo anterior se agrega que, la misma Corporación ha efectuado una interpretación frente a la exigibilidad de las acreencias de los trabajadores oficiales en torno a lo establecido en el par. 2º del art. 1º del Decreto 797 de 1949, en concordancia con lo que reseñan los arts. 1551 y 1553 del CC, último según el cual *«quien tiene plazo, nada debe»*, al señalar que la cancelación de las obligaciones para este tipo de servidores solo puede exigirse a partir del día 91, no antes, pues es a partir de allí cuando se vence el período de gracia de los 90 días en favor de la administración pública como deudora y muta la obligación a una de naturaleza pura y simple, puesto que el empleador oficial, desde allí queda constituido en mora; por ende, es a partir de ese día que inicia el conteo de la prescripción y no desde la data en que la relación laboral se extingue (CSJ SL9641-2014 recordada en la CSJ SL6380-2015), con la precisión de que esos 90 días se deben entender calendario y no hábiles (CSL SL981-2019).

En el presente caso, la relación laboral por la cual se efectuará el cálculo de las condenas culminó el 28 de noviembre de 2015, lo que significa que el término prescriptivo inició a correr el 29 de febrero de 2016, por ser año bisiesto, teniendo plazo para reclamar en tiempo, hasta el 29 de febrero de 2019.

El trienio se interrumpió con la reclamación administrativa que se elevó ante la ESU el 6 de abril de 2017, por los mismos hechos y pretensiones perseguidas en el presente proceso, la cual fue adicionada el 1º de agosto de 2017 con el fin de obtener información acerca de cuántos Defensores del Espacio Público contrató la entidad entre los años 2011 y 2017 (págs. 52-66, 153-163, 250-254 arch. 2 C01), y la presentación de la demanda ocurrió en

³ Cfr. Arts. 8º del Decreto 3135 de 1968, 43 del Decreto 1848 de 1969, y 8º del Decreto 1045 de 1978.

tiempo, el 19 de septiembre de 2017 (arch. 1 C01), de donde se infiere que respecto del único contrato que se declarará en los términos inicialmente explicados, no se encuentran prescrita ninguna acreencia, pues este inició el 4 de agosto de 2014, esto es, más de 3 años antes de la interrupción, así que en estos términos se **modificará** la decisión de primera instancia.

Responsabilidad solidaria.- En este punto, es necesario hacer referencia a este asunto teniendo en cuenta que la declaración del vínculo laboral antes aludido conlleva la imposición del pago de acreencias laborales respecto de las cuales, como el Municipio de Medellín fue condenado en forma solidaria a su pago, al tenor de lo dispuesto en el citado art. 6º del Decreto 2127 de 1945, se verificará igualmente el monto liquidado en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte a su favor, siempre y cuando la solidaridad deprecada exista.

Se aportaron los contratos Interadministrativos n° 4600040900 de 2012, 4600045644 y 4600050309 de 2013, 4600055366 de 2014 con sus correspondientes ampliaciones, adiciones y *otros* suscritos entre la ESU y el Municipio de Medellín - Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, con el objeto de ejecutar la administración delegada de recursos para dar continuidad y desarrollar los programas *“Comerciales para la vida”, “Ciudad Vida, Espacio Público para la vida y la convivencia”* y *“Plan de Intervención Integral del Centro de la Ciudad”* a través de la regulación, educación, vigilancia y control del espacio público, *«en vista de la necesidad que tiene el Municipio de Medellín de tener protegido el centro de la ciudad durante todo el tiempo (...) para que no se genere desorden y ocupación indebida del espacio público en el centro y así la ESU podrá dar inicio a los trámites para la contratación de la empresa temporal que suministrará el personal en misión»*, en cuyo alcance se dispuso de manera principal las siguientes actividades:

i) Llevar a cabo el control, regulación y administración del espacio público a través de estrategias que permitan la recuperación del mismo, **ii)** ejercer vigilancia y control en la aplicación de las normas urbanísticas y de la publicidad exterior visual en la ciudad de Medellín, **iii)** brindar acompañamiento y control en los eventos de ciudad que se desarrollen o impliquen el uso, ocupación y aprovechamiento económico del espacio público, **iv)** desarrollar alternativas de seguimiento para los comerciales informales que pertenecen a los programas de regulación de la Subsecretaría de Espacio

Público y Control Territorial, **v)** implementar estrategias de presencia flexible en los proyectos estratégicos y nuevos espacios públicos de la ciudad, **vi)** apoyar las estrategias de sensibilización y concertación con la población regulada y la ciudadanía en general sobre el uso adecuado del espacio público, **vii)** implementar procesos de cooperación y apoyo con entidades públicas y/o privadas a nivel nacional y/o internacional, **viii)** apoyar las estrategias de control de las autoridades ambientales del Municipio de Medellín, desarrollando un plan de atención para los puntos de disposición inadecuada de residuos sólidos, con actividades de educación, sensibilización, vigilancia, control, recuperación y mantenimiento del espacio público, **ix)** implementar acciones de ornato, aseo y embellecimiento en el Municipio de Medellín, de acuerdo con un diagnóstico que deberá desarrollarse, evidenciando cuáles son los corredores o zonas que requieren de intervención, bien sea correctiva y /o preventiva, identificando además planes de contingencia para eventos especiales de ciudad; **x)** controlar las ventas informales en el centro de la ciudad durante las temporadas de final de año, escolar y eventos de ciudad.

Todo lo anterior, a través de la contratación del personal y recursos logísticos, técnicos, tecnológicos y operativos necesarios conforme las especificaciones técnicas descritas en la invitación a contratar, estudio previo y oferta presentada, para lo cual «*se deben identificar puntos y formas de atención y planificar el recurso humano, técnico y logístico necesario para darle cumplimiento en función del objetivo del contrato interadministrativo y la misión de la Subsecretaría del Espacio Público y Control Territorial*» (págs.. 307-335, 343-367, 377-391, 402-427 arch. 2 C01); de ahí que, como a la ESU le asignó el gerenciamiento y administración del proyecto de vigilancia y control sobre el uso del espacio público, esta entidad celebró los contratos de suministro de personal con las empresas de servicios temporales codemandadas a los que se hizo referencia respecto de Empleamos SA y los que confesaron haber ejecutado Misión Empresarial SA y la ESU en sus contestaciones a la demanda.

De este modo, no se puede pasar por alto, que las gestiones delegadas a la ESU son conexas con la misión del municipio de Medellín, de conformidad con lo establecido en los arts. 311 y 315 de la Constitución Política, que expresan: “*Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento*

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” y “Son atribuciones del alcalde... 2. Conservar el orden público en el municipio... 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo...”.

Así, es claro que la entidad territorial, se benefició del trabajo desempeñado por el demandante, aunado al hecho de que tuvo injerencia directa en el vínculo existente entre este y la ESU, pues el objeto de los citados convenios administrativos, estaba íntimamente relacionado con las funciones y competencias que se encuentran radicadas en cabeza exclusiva del ente territorial conforme con los arts. 82, 311 y 313 de la Constitución Política; en consecuencia, se **confirma** lo decidido por el *a quo* en cuanto a la solidaridad que le asiste.

Sin embargo, ha de agregar la Sala que omisión de responsabilidad laboral en que incurrió la ESU como usuaria frente al demandante como trabajador en misión, supone que las empresas de servicios temporales funcionen lícitamente conforme lo establecido en el art. 82 de la Ley 50 de 1990, pues de lo contrario, como lo ha adoctrinado antaño la jurisprudencia del Máximo Órgano de Cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, las empresas de servicios temporales irregulares solo podrían catalogarse como empleadores aparentes y verdaderos intermediarios que ocultan su calidad en los términos del num. 2º del art. 35 del CST, de manera que el usuario ficticio se consideraría verdadero patrono y la supuesta EST pasaría a responder solidariamente de las obligaciones laborales conforme al ordinal 3º del citado artículo del CST (CSJ SL 24 abr. 1997, rad. 9435, reiterada en CSJ SL 22 feb. 2006, rad. 25717 y CSJ SL17025-2016).

En consecuencia, por virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor del municipio, se **adicionará** lo atinente a la responsabilidad en las condenas, pues las empresas de servicios temporales aquí demandadas, también son solidariamente responsables por haber actuado en forma irregular, dado que los servicios solicitados a Misión Empresarial SA y a Empleamos SA por parte de la ESU no tienen origen ni justificación en alguna de las causales señaladas en el art. 77 de la Ley 50 de 1990, ni ilustran acerca de la necesidad específica y concreta que tenía la ESU, por consiguiente, la presencia del demandante en sus instalaciones o en donde designara la Subsecretaría del Espacio Público y

Control Territorial del Municipio de Medellín, no se explica en función de las hipótesis del citado artículo, ni las accionadas supieron justificarla a lo largo del proceso. En todo caso, es palmaria y ostensible la extralimitación o superación del tiempo máximo previsto de «seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más», situación anómala en el uso de la figura del servicio temporal, de la que se deriva la intención de la ESU y de las EST de encubrir mediante una figura legítima, una necesidad indefinida en el desarrollo de actividades bajo la apariencia de un requerimiento temporal, con el objeto de aprovecharse ilimitadamente de los servicios personales del demandante.

Acreencias laborales.- Aclarado lo anterior, en grado jurisdiccional de consulta en favor del municipio demandado, procede el despacho a reexaminar las condenas del último vínculo de carácter laboral continuo que ató al demandante con la ESU, no sin antes establecer el monto salarial con el cual deberán ser liquidadas, en su calidad de trabajador oficial:

Reajuste – nivelación salarial.- El demandante no corrió con la carga probatoria impuesta por los arts. 164 y 167 del CGP, para demostrar que tenía derecho al pago de las diferencias salariales deprecadas en comparación con un trabajador que haya sido vinculado en forma directa en la planta de personal de la ESU que realizara las mismas funciones que él; en el libelo se limitó a enunciar que el salario debía ser equiparado al del cargo más bajo de dicha planta, sin acreditar las razones objetivas de su dicho, ni demostró que las funciones ejercidas fueran idénticas a las del pretendido cargo.

Además, si bien el art. 5º de la Ley 6ª de 1945 establece que la diferencia de salarios para los trabajadores dependientes de una misma empresa en una misma región económica y por trabajos equivalentes, solo puede fundarse en razones de capacidad profesional o técnica, de antigüedad, de experiencia en la labor, de cargas familiares o de rendimiento de la obra, en el expediente no están demostrados los supuestos fácticos mínimos para dar aplicación a dicho principio, en la medida en que no fue allegada prueba del ejercicio de funciones similares, idénticas o equivalentes con algunos de los cargos de los trabajadores oficiales respecto de los cuales pretende nivelarse (CSJ SL10196-2017, CSJ SL4345-2020), por lo que tampoco existe certeza del grado que hubiera podido ostentar y contrario a lo concluido por el *a quo*, de ninguna manera puede ser prueba de ello, el comunicado con radicado externo n° 2017002205 expedido el 13 de julio de 2017 por el Secretario General de la

ESU en respuesta a una de las reclamaciones elevadas por la parte actora (págs. 64-66 arch. 2 C01), ya que se trata de las tablas históricas salariales establecidas de manera general de los años 2011 a 2017 para el *«cargo de trabajador oficial adscrito a la empresa con el salario más bajo, (...) que corresponde al cargo de Bachiller»*, pero no se extraen parámetros de comparación específica con el demandante como para verificar si tal denominación corresponde a la misma o similar cantidad de trabajo y la idéntica o análoga calidad y eficiencia en la labor desempeñada.

En consecuencia, se **revocará** lo atinente a la condena por concepto de reajuste salarial, para en su lugar, **absolver** a las demandadas de este concepto y consecuente con ello, procederá la Sala a liquidar las acreencias insolutas a que haya lugar con la misma suma que devengó el demandante en vigencia del vínculo contractual conforme con los comprobantes de pago adjuntos, con la precisión de que frente a los meses respecto de los que no se allegó tal documental, se tomará como mínimo el monto pactado en los contratos de trabajo (se anexa a esta decisión la liquidación efectuada).

Prima de servicios.- Comoquiera que está contenida en el Decreto 1042 de 1978, que no es aplicable a los trabajadores de empresas industriales y comerciales del Estado (CSJ SL1148-2016), no hay lugar a ordenar el reajuste pretendido respecto de esta acreencia, lo que conlleva a **revocar** lo decidido en primera instancia.

Prima de vacaciones.- Dicha acreencia fue creada por los Decretos 174 y 230 de 1975, derogados por el Decreto 710 de 1978, siendo reconocida nuevamente en virtud del Decreto 1045 de 1978 (arts. 17, 24 a 30), la cual únicamente está referida a los empleados públicos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, y Unidades Administrativas Especiales del orden nacional, sin que de la lectura de los arts. 2º y 5º se desprendan las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (CSJ SL1174-2022, CSJ SL4633-2021, CSJ 6380-2015, CSJ SL 30 ene. 2013 rad. 39202, CSJ SL 6 may. 2010 rad. 35876, CSJ SL 28 feb. 2006 rad. 26986), por lo que se **revocará** lo decidido en primera instancia, dado que esta prestación no tiene cabida respecto de los trabajadores oficiales de la ESU.

Prima de navidad.- Según los arts. 11 del Decreto 3135 de 1968, 1º del Decreto 3148 de 1968, y 51 del Decreto 1848 de 1969, normas aplicables a los

trabajadores de una EICE (CSJ SL981-2019), el demandante tiene derecho a un mes de sueldo a 30 de noviembre de cada año, pagadero en la primera quincena de diciembre, o en forma proporcional, teniendo en cuenta que en este caso en específico, no se presenta la hipótesis de incompatibilidad descrita en el párrafo 2º del citado art. 11, al no haberse demostrado tal aspecto; en consecuencia, efectuadas las operaciones aritméticas del caso se obtiene un monto de \$1.273.936 en favor del demandante, monto inferior al liquidado en primera instancia, por lo que se **modificará** la sentencia consultada en este aspecto.

Reajuste en la compensación en dinero de las vacaciones.- Según el art. 8º del Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el art. 43 del Decreto 1848 de 1969, y 1º de la Ley 995 de 2005, las compensadas en dinero se deben liquidar sobre el último salario, por cada año de servicios, y proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado. Efectuada la liquidación se observa que el demandante ha debido recibir por el último vínculo sostenido con la ESU la suma de \$934.346, pero solo se le pagó \$633.049, quedándole un saldo a su favor de \$301.297, monto inferior al establecido por el *a quo*, por lo que se **modificará** dicho valor.

Reajuste de las Cesantías.- De conformidad con los arts. 17 de la Ley 6ª de 1945, 6º del Decreto 1160 de 1947, 27 a 29 del Decreto 3118 de 1968, y 13 de la Ley 344 de 1996, normas que establecen el pago de tal prestación por cada año de servicios y su proporción, sin retroactividad; luego de las operaciones aritméticas de rigor, en grado jurisdiccional de consulta, se **modifica** el monto liquidado en primera instancia a \$460.313, dado que se le pagó al demandante \$987.800, cuando ha debido pagársele \$1.448.113.

Reajuste a los intereses de las cesantías.- Los arts. 13 de la Ley 344 de 1996 y 1º del Decreto 1582 de 1998 consagran que los trabajadores oficiales del nivel territorial que se vincularon a partir del 31 de diciembre de 1996 se les aplicará el régimen de liquidación y pago de cesantías conforme a la Ley 50 de 1990, que en su art. 99 consagra aquellos intereses (CSJ SL1174-2022). Por tanto, hay lugar a su reconocimiento, en la cuantía establecida por el *a quo*, pues la liquidada por esta instancia en consulta, resultó ser superior, por lo que se **confirma** dicho monto.

Sanción art. 99 de la Ley 50 de 1990.- Por regla general, no tiene aplicación en los contratos de trabajo del sector oficial -habida cuenta que, tuvo como finalidad introducir modificaciones al CST-, por expresa previsión del art. 4º del CST, empero tal restricción, no aplica para los trabajadores oficiales del nivel territorial, por así preverlo los arts. 1º del Decreto 1582 de 1998, 13º de la Ley 344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998 (CSJ SL582-2021, CSJ SL1141-2021; CE 1º feb. 2018 rad. 08001 23 31 000 2011 01188 01 Sección Segunda-Subsección B), en esa medida es perfectamente viable su aplicación para este caso, al tratarse de un trabajador oficial del orden territorial.

No obstante, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido de manera pacífica y reiterada que el límite temporal de la sanción en comento se causa durante la vigencia de la relación de trabajo, es decir, hasta que dicho vínculo finalice, toda vez que cuando esto último ocurre, a partir de ese momento surge la obligación a cargo del empleador de pagar las cesantías definitivas y empieza a correr eventualmente la indemnización moratoria prevista en el art. 1.º del Decreto 797 de 1949 (CSJ SL 6 sep. 2012 rad. 42597), por tanto, el *a quo erró* al no establecer un límite temporal a dicha sanción.

Debido a que no obra en el expediente prueba alguna que acredite que al demandante se le consignó en un fondo privado de cesantías el auxilio correspondiente a tal prestación social en vigencia del último vínculo laboral aquí declarado, se **modificará** la decisión apelada y consultada, pues la aludida sanción debe ir solamente hasta el 28 de noviembre de 2015, lo que arroja la suma única de \$9.296.912 a razón de 283 días corridos desde el 15 de febrero de la misma anualidad; aunado a que como se verá a continuación, para la Sala es claro que la empleadora no actuó bajo los parámetros de la buena fe, lo que hace que, aunque esta sanción no sea de imposición automática, al revisar la conducta de las demandadas, no queda duda alguna de que deben responder solidariamente en el pago de este rubro.

Indemnización moratoria art. 1º del Decreto 797 de 1949.- Sabido es que este tipo de indemnizaciones no aplican automáticamente y en cada caso es deber del funcionario judicial analizar la conducta patronal de cara a la buena o mala fe; empero en el proceso se demostró que la ESU, utilizó de manera indebida la contratación por servicios temporales contemplada en la Ley 50 de 1990, con lo que concluye la Sala, que la entidad pretendió ocultar una relación

de carácter laboral, a pesar de que era evidente la naturaleza del vínculo, en tanto, se emitían órdenes concretas al demandante para ejecutar sus funciones, se sometía su actividad personal al constante y permanente control y seguimiento y, en general, por haber utilizado formas de vinculación que tienen carácter transitorio y excepcional en el ordenamiento jurídico, para cubrir funciones permanentes en la entidad, lo que denota su mala fe, sin que adujera en su defensa razones atendibles, que justificaran una creencia razonable de estar enfrentada a una contratación diferente a la de índole laboral.

En consecuencia, hay lugar a ordenar el pago de la indemnización moratoria a razón de 1 día de salario por cada día de retardo, después del vencimiento del plazo de 90 días calendario con que contaba la entidad demandada para efectuar el pago, según los presupuestos de la norma aplicable (CSJ SL981-2019); es decir, \$32.641 diarios, a partir del 29 de febrero de 2016 hasta que se efectúe el pago de las acreencias del demandante, con lo cual se **adicionará** la sentencia apelada en ese sentido, con el fin de ordenar el pago de la indemnización moratoria.

Aquí se precisa que las empresas temporales demandadas al ser simples intermediarias como se demostró, resultan ser también responsables del pago de estas sanciones moratorias pues conforme a sus actuaciones no es atendible que no se percataran de la ilicitud de la conducta al contratar periódicamente con la ESU, incumpliendo las normas estatuidas para llevar a cabo sus vinculaciones laborales sin desnaturalizar su esencia.

Indemnización por despido sin justa causa.- En el presente caso, no se logra establecer que la desvinculación del demandante se hubiera dado por la decisión arbitraria y unilateral de la ESU, en razón a que no existe un fundamento fáctico en la demanda que permita deducir el motivo del finiquito, el único testigo no dio razón de ello, y las pruebas documentales allegadas tampoco demostraron tal circunstancia. De ahí que no sea posible acoger el argumento del *a quo*, en la medida que no se puede concluir que el vínculo feneció por la voluntad unilateral de la ESU, ni que se acreditó el despido (CSJ SL592 de 2014, CSJ SL13791-2017), lo que trae como consecuencia, que se **revoque** la sentencia apelada en este punto por la ESU.

Indexación.- Solo resulta procedente su condena en lo que respecta al reajuste en la compensación en dinero de las vacaciones, con el IPC certificado por el Dane y vigente al momento de su pago, por ser una acreencia que no tiene carácter salarial ni prestacional (CSJ SL15507-2015); además, resulta incompatible con la indemnización moratoria incluye los perjuicios concernientes a la devaluación de la moneda que se derivan del no pago oportuno de las prestaciones sociales y salarios únicamente (CSJ SL17025-2016, CSJ SL807-2013 y CSJ SL9641-2014), y así se **modificará** la sentencia de primera instancia consultada en este aspecto.

Compensación.- Al haberse propuesto como medio exceptivo la compensación, ciertamente es viable autorizar a la parte pasiva **descontar** de las sumas adeudadas lo cancelado por las empresas de servicios temporales a título de primas de servicios, lo cual equivale a \$1.075.008, comoquiera que de este tipo de acreencias no son beneficiarios los trabajadores oficiales; y, se **adicionará** la sentencia en ese aspecto.

Llamamiento en garantía.- En los contratos de suministro de personal suscritos entre la ESU y las empresas de servicios temporales codemandadas, se indicó que estas como contratistas se obligaban a constituir en favor de la ESU y del Municipio de Medellín una garantía única como mecanismo de cobertura del riesgo durante todo el término de tales contratos con el fin de cubrir el cumplimiento contractual, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones al personal y responsabilidad civil extracontractual, pudiendo ser rechazada por parte de la ESU (págs.. 514-541, 557-561 arch. 2 C01)

Las pólizas de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales (garantía única) n.º 0729030-1, 0836109-2, 0936547-4, 1102408-3, con sus respectivas ampliaciones y anexos con las que se garantiza el riesgo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales derivadas del cumplimiento del objeto de los contratos interadministrativos n.º, 4600040900 de 2012, 4600045644 de 2013, 4600050309 de 2013 y 4600055366 de 2014, respectivamente; tales pólizas fueron tomadas por la ESU, allí se indicó que el asegurado y beneficiario es el Municipio de Medellín – Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos y las mismas estuvieron vigentes entre el 15 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 (págs. 286-306, 336-342, 368-376, 392-401 arch. 2, archs. 41, 42, 44-47 C01), es decir, mientras rigió el vínculo laboral surgido entre el demandante y la ESU aquí declarado.

De esta manera, como las pólizas reseñadas tienen como objeto cubrir los contratos interadministrativos de administración delegada de recursos para desarrollar los programas en los cuales el demandante participó en defensa del espacio público a través de los contratos por obra o labor contratada que también hicieron alusión a tales convenios, habrá de **adicionarse** la sentencia apelada en este aspecto, con el fin de ordenar a Seguros Generales Suramericana SA que, en el evento de que el Municipio de Medellín sufrague como consecuencia de su responsabilidad solidaria, las prestaciones e indemnizaciones aquí impuestas en contra de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU adscrita al Municipio de Medellín (antes Fondo Metropolitano de Seguridad – Metroseguridad) frente al contrato de trabajo que aquí se declaró, deberá proceder a afectar la póliza vigente para ese asunto dentro de los amparos y topes definidos.

Compulsa de copias.- La decisión de compulsar copias del proceso para que las entidades correspondientes estudien las conductas desplegadas por las partes y acaecidas conforme al material probatorio allegado al interior del mismo, no resulta de manera alguna lesiva a los derechos de las partes (CC T-738-2007, CSJ SP16933-2017, CSJ STP13900-2016, CSJ SP 18 de abr. 2012 rad. 38356); en todo caso, no es una decisión que resulte modificable o revocable en virtud del recurso de apelación, puesto que tal orden constituye un ejercicio de la autonomía y del deber constitucional y legal de los funcionarios públicos, de denunciar ante las autoridades competentes las circunstancias, hechos, actos u omisiones, que consideren constitutivos de una conducta punible, así como las faltas disciplinarias o contravenciones de cualquier índole, sin que ello signifique una extralimitación de sus funciones (CSJ STL9778-2023, STL6316-2023, CSJ STL3632-2022, CSJ STL6585-2022, CSJ STL8900-2021, CSJ STL220-2016, CSJ AHC7596-2016, CSJ AP5165-2015, CSJ SP16933-2014), ni riñe con los deberes y poderes de ordenación, instrucción⁴ y disciplinarios del *a quo* como director del proceso, por cuanto si encontró dentro de las actuaciones, irregularidades que merezcan ser investigadas, era su deber, como lo hizo a través de dicha orden, dar aviso a la autoridad competente para tal efecto.

⁴ Arts. 113, 228 de la CP, 42 a 44 del CGP, 40, 48 y 145 del CPTSS.

De manera que, en el evento en que el ente investigador respectivo, encuentre mérito para iniciar un proceso o una actuación del caso, la misma deberá adelantarse de conformidad con los procedimientos legales establecidos para tal fin, caso en el cual, los implicados podrán ejercer los derechos de defensa y contradicción al interior del respectivo trámite. Es decir, este tipo de órdenes de simple trámite constituyen un aspecto colateral, *«porque cualquier controversia sobre la viabilidad de iniciar o no la acción a que hubiere lugar, corresponde dirimirla al funcionario competente y no al que, en cumplimiento de su deber legal, se limita simplemente a informarlo»* (CSJ AP1938-2018 y CSJ AP 17 ago. 2000 rad. 15862), de ahí que no sea sometida a control alguno por parte de los superiores de los funcionarios que las imparten bajo su facultad discrecional.

Costas.- Frente a este aspecto en grado jurisdiccional de consulta en favor del Municipio, ha de **aclarar** la Sala que los arts. 6º del Decreto 2127 de 1945 y 35 del CST no contemplan el pago solidario de este rubro a cargo del beneficiario del trabajo o dueño de la obra ni del simple intermediario, de modo que no es que el pago de las costas procesales en primera instancia sea impuesto de manera solidaria a las demandadas como lo indicó el *a quo*, sino que al tenor de lo dispuesto en el art. 365 del CGP se debe imponer este rubro a quien haya resultado vencido en el juicio, como en este caso la totalidad de la parte pasiva; en consecuencia, el pago de este concepto estará a cargo de las demandadas y en favor del demandante, pero a prorrata en la cuantía establecida por el *a quo*.-

En la alzada no se causaron costas.

Se advierte que en la parte resolutive de esta decisión se incluirá en su integridad la parte resolutive de la sentencia estudiada, con las modificaciones y adiciones del caso, como quiera que no hay absoluta claridad en la numeración o rotulación efectuada en ese acápite en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto a la vigencia del vínculo laboral declarado y las responsabilidades de las demandadas en el mismo. **REVOCAR PARCIALMENTE** el numeral SEGUNDO, en cuanto a que condenó al pago de reajustes salariales, de prima de servicios, prima de vacaciones, e indemnización por despido injusto, para en su lugar, ABSOLVER a las demandadas de tales conceptos; **MODIFICAR** las condenas por concepto de prima de navidad, reajustes de vacaciones y cesantías, sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990, e indexación; **ADICIONAR** la condena por concepto de indemnización moratoria art. 1º del Decreto 797 de 1949 y la autorización de compensación de lo pagado por prima de servicios. **REVOCAR** los numerales TERCERO y CUARTO, en cuanto se eximió de responsabilidad a la llamada en garantía y se absolvió a las EST demandadas. Y, **CONFIRMAR** en lo demás la sentencia apelada y consultada, todo ello, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones anteriores.

SEGUNDO: En consonancia con el numeral anterior, la parte resolutive de la sentencia apelada y consultada quedará así:

«**PRIMERO: DECLARAR** la existencia de un contrato de trabajo bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU (antes Metroseguridad) y Eugenio Antonio López Giraldo, vigente del 4 de agosto de 2014 al 28 de noviembre de 2015, lapso en el cual el demandante actuó en forma continua como trabajador oficial, la ESU ejerció como verdadero empleador, el Municipio de Medellín fungió como beneficiario de la labor y las empresas Misión Empresarial Servicios Temporales SA, y Empleamos SA funcionaron como simples intermediarias.

SEGUNDO: CONDENAR de manera solidaria a la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU (antes Metroseguridad) en su calidad de verdadero empleador oficial, al Municipio de Medellín como beneficiario de la labor y a las simples intermediarias Misión Empresarial Servicios Temporales SA y Empleamos SA al pago en favor del demandante, de las siguientes acreencias y montos:

- a) Prima legal de navidad **\$1.273.936.**
- b) Reajuste en la compensación en dinero de las vacaciones: **\$301.297** suma que deberá ser indexada al momento de su pago.
- c) Reajuste del auxilio de cesantías: **\$460.313.**
- d) Reajuste de los intereses a las cesantías: **\$70.755.**
- e) Sanción art. 99 de la Ley 50 de 1990 liquidada entre el 15 de febrero y el 28 de noviembre de 2015, para un total único de **\$9.296.912.**
- f) Indemnización moratoria art. 1º del Decreto 797 de 1949: a razón de un día de salario calendario, por cada día de retardo, es decir, **\$ 32.641 diarios**, a partir del 29 de febrero de 2016 hasta que se efectúe el pago de las acreencias del demandante.

TERCERO: ORDENAR a Seguros Generales Suramericana SA que, en el evento de que el Municipio de Medellín entre a sufragar, como consecuencia de su responsabilidad solidaria, las prestaciones e indemnizaciones aquí impuestas en contra de la ESU frente

al contrato de trabajo que aquí se declaró, deberá proceder a afectar la póliza vigente para ese asunto, dentro de los términos, amparos y topes definidos.

CUARTO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de compensación para lo cual se **autoriza** a la parte pasiva a **descontar** de las sumas adeudadas, lo cancelado por las empresas de servicios temporales el monto de \$1.075.008 a título de primas de servicios; se declaran no probados los demás medios exceptivos, incluso la prescripción.

QUINTO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

SEXTO: COMPULSAR copias al Ministerio de Trabajo para que se estudie la viabilidad de imponerles las sanciones administrativas correspondientes a las empresas Misión Empresarial Servicios Temporales SA, y Empleamos SA, ante una eventual irregularidad en los contratos de trabajo realizados por fuera de la competencia establecida en los arts. 77 y ss de la Ley 50 de 1990.

SÉPTIMO: Costas de primera instancia a cargo de las demandadas, a prorrata y en favor del demandante en la cuantía descrita por el *a quo*.

TERCERO: Sin costas en la instancia ante su no causación.

CUARTO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendándose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
Magistrado

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EoIHPVA3zDxDuRKHkbhSPWoB8xV9Dnd7QWCJhCf-BCDwRw?e=1Xfh6o](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EoIHPVA3zDxDuRKHkbhSPWoB8xV9Dnd7QWCJhCf-BCDwRw?e=1Xfh6o)

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle
Magistrada
Sala 017 Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **59f0bd4d06e27e44c763c2eaa3465f0963fa0744a8ea009bf7ef386e4265795e**

Documento generado en 26/02/2024 04:02:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

Expediente n.º 05 001 31 05 003 2017 00773 01

Demandante: EUGENIO ANTONIO LÓPEZ GIRALDO

Demandado: MISIÓN EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES SA, EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU (antes METROSEGURIDAD), EMPLEAMOS SA y MUNICIPIO DE MEDELLÍN

REMUNERACIÓN PERCIBIDA				
Intermediario	Desde	Hasta	Auxilio de transporte	Salario más horas extras y compensatorios
Misión Empresaria	4-ago.-2014	31-ago.-2014	\$ 64.800	\$ 847.408
Misión Empresaria	1-sep.-2014	30-sep.-2014	\$ 72.000	\$ 1.017.135
Misión Empresaria	1-oct.-2014	31-oct.-2014	\$ 72.000	\$ 987.662
Misión Empresaria	1-nov.-2014	30-nov.-2014	\$ 72.000	\$ 941.564
Misión Empresaria	1-dic.-2014	31-dic.-2014	\$ 72.000	\$ 941.564
Misión Empresaria	1-ene.-2015	31-ene.-2015	\$ 72.000	\$ 896.728
Misión Empresaria	1-feb.-2015	28-feb.-2015	\$ 74.000	\$ 1.012.181
Misión Empresaria	1-mar.-2015	8-mar.-2015	\$ 9.867	\$ 298.162
Empleamos SA	10-mar.-2015	31-mar.-2015	\$ 49.333	\$ 652.818
Empleamos SA	1-abr.-2015	30-abr.-2015	\$ 74.000	\$ 1.003.709
Empleamos SA	1-may.-2015	31-may.-2015	\$ 74.000	\$ 979.227
Empleamos SA	1-jun.-2015	30-jun.-2015	\$ 74.000	\$ 979.227
Empleamos SA	1-jul.-2015	31-jul.-2015	\$ 74.000	\$ 1.003.408
Empleamos SA	1-ago.-2015	31-ago.-2015	\$ 74.000	\$ 979.227
Empleamos SA	1-sep.-2015	30-sep.-2015	\$ 74.000	\$ 979.227
Empleamos SA	1-oct.-2015	31-oct.-2015	\$ 74.000	\$ 979.227
Empleamos SA	1-nov.-2015	28-nov.-2015	\$ 69.067	\$ 979.227

Salario mensual promedio	
2014	\$ 966.394
2015	\$ 985.538

Reajuste Cesantías arts 17 Ley 6-1945, 6 Decreto 1160-1947, 27 Decreto 3118-1968, y 13 Ley 344-1996	
Año	Monto
2014	\$ 456.050
2015	\$ 992.063
7. Total	\$ 1.448.113
pagadas	\$ 987.800
Restante	\$ 460.313

Inf. a la de 1ra instancia

No hay prescripción

Prima de navidad legal art. 11 Decreto 3135 de 1968		
	Año	Monto
	2014	\$ 384.472
	2015	\$ 889.465
Total		\$ 1.273.936

Inf. a la de 1ra instancia

Extremos temporales	
Inicio	Final
4-ago.-2014	28-nov.-2015
1 años, 3 meses y 24 días	

Reajuste intereses a las Cesantías art. 99 Ley 50 de 1990	
Año	Monto
2014	\$ 22.346
2015	\$ 108.135
7. Total	\$ 130.481
pagadas	\$ 38.427
Restante	\$ 92.054

Sup. a la de 1ra instancia

Indem. Moratoria art. 1° del Dec. 797 de 1949		
Desde	29-feb.-2016	Valor Día
Hasta	31-ene.-2024	\$ 32.641
N° de días	2850	
	1. Total	\$ 93.026.565

Adic. a 1ra instancia

//Nmc.-**

Compensación autorizada	\$ 1.075.008
-------------------------	--------------

Reajuste Vacaciones legales arts. 8° Dec. 3135 de 1968, 43 y 48 del Decreto 1848 de 1969, y 1° de la Ley 995 de 2005			
Año	Desde	Hasta	Monto
1	4-ago.-2014	3-ago.-2015	\$ 489.614
2	4-ago.-2015	28-nov.-2015	\$ 444.732
5. Total			\$ 934.346
		pagadas	\$ 633.049
Restante			\$ 301.297

Inf. a la de 1ra ins

Sanción art. 99 Ley 50 de 1990		
Desde	15-feb.-2015	Valor Día
Hasta	28-nov.-2015	\$ 32.851
N° de días	283	
	1. Total	\$ 9.296.912

Inf. a la de 1ra instancia

Más indexación de la compensación en dinero de las vacaciones al momento de su pago.-

Pagos recibidos		
Concepto	fecha	valor
Prima de servicios	30-nov.-14	\$ 335.620
Prima de servicios	15-dic.-14	\$ 84.464
Prima de servicios	01-mar.-15	\$ 201.418
Vacaciones	01-mar.-15	\$ 280.174
Cesantías	01-mar.-15	\$ 199.762
intereses a las cesanti	01-mar.-15	\$ 4.400
Vacaciones	03-ago.-15	\$ 179.525
Cesantías	03-ago.-15	\$ 400.050
intereses a las cesanti	03-ago.-15	\$ 17.602
Prima de servicios	03-ago.-15	\$ 65.518
Vacaciones	07-dic.-15	\$ 173.350
Cesantías	07-dic.-15	\$ 387.988
intereses a las cesanti	07-dic.-15	\$ 16.425
Prima de servicios	07-dic.-15	\$ 387.988

pagadas

pagadas

pagadas